

PERSPECTIVAS

Suplemento de análisis político



Foto: Carlos Herrera

2019: el año del cambio para Nicaragua

PERSPECTIVAS es una publicación del **Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO)**, y es parte del **Observatorio de la Gobernabilidad** que desarrolla esta institución. Está bajo la responsabilidad de Sofía Montenegro.

Si desea recibir la versión electrónica de este suplemento,
favor dirigirse a: cinco@cinco.org.ni



Una introducción necesaria

El boletín de análisis mensual "Perspectivas" es publicado por CINCO desde hace 12 años de manera consecutiva. A la fecha, ha acumulado más de 120 números abordando diversos aspectos políticos, económicos y sociales de Nicaragua. Su propósito es contribuir al análisis crítico de los aspectos más importantes en la agenda del país, especialmente para actores sociales y la opinión pública. Perspectivas se ha publicado aun en situaciones adversas como el allanamiento ilegal que sufrió CINCO en el año 2008 por parte del gobierno de Daniel Ortega. En diciembre de 2018, el régimen atacó nuevamente al centro cancelando su personería jurídica de manera ilegal y arbitraria, junto a las de otras ONGs y medios de comunicación independientes. El propósito es acallar las voces críticas del país; sin embargo, los investigadores tenemos un compromiso firme con el pensamiento crítico y la libertad de expresión, por eso, aun en estas nuevas circunstancias adversas, seguiremos publicando el boletín Perspectivas.

Iniciando el año 2019 es necesario hacer un recuento del contexto y el profundo giro que se efectuó en Nicaragua a partir de abril 2018 con la insurrección cívica. El nuevo escenario ha colocado al país frente a un futuro incierto y sombrío debido a la grave crisis política y de derechos humanos, pero principalmente por la obcecada decisión de Daniel Ortega y Rosario Murillo de mantenerse en la presidencia aun cuando para, prácticamente todos los actores nacionales e internacionales, así como para los mismos allegados al régimen, el desenlace de la crisis ya está anunciado y una nueva transición está a las puertas.

Hasta hace poco algunas perspectivas insisten en afirmar que los Ortega-Murillo han ganado terreno al lograr prolongar la crisis y frenar las multitudinarias marchas ciudadanas a punta de represión y es factible que alarguen su permanencia todavía más. En otras perspectivas, el tiempo de los Ortega-Murillo se ha acortado, especialmente por la aplicación de las fuertes sanciones de parte de Estados Unidos, la condena generalizada de la comunidad internacional y las muestras de resquebrajamiento internos que se evidenciaron con la renuncia del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, otrora uno de los operadores políticos más cercanos a la pareja presidencial.

La crisis que ya se anunciaba

Desde su llegada a la presidencia, Daniel Ortega construyó las condiciones para establecer un régimen autoritario que asegurara su permanencia en el poder hasta que estalló la crisis de abril. Esas condiciones incluyen, en primer lugar, el control de todos los poderes e instituciones del Estado y la centralización de todos los procesos de toma de decisiones en él y su esposa Rosario Murillo, actualmente vicepresidenta y coordinadora de la Secretaría de Comunicación. El control del Estado transcurrió en un proceso acelerado que incluyó configurar una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, subordinación de la Corte Suprema de Justicia y Consejo Supremo Electoral nombrando magistrados y funcionarios leales al régimen. Esto le permitió a Ortega y Murillo contar con la aprobación de leyes a su conveniencia y reformar el marco jurídico del país para ajustarlo a las necesidades del proyecto continuista; controlar los procesos judiciales y asegurar la impunidad para sus acciones; además de controlar a su conveniencia el sistema electoral, así como sus resultados.

La alianza con el ejército y la subordinación de la policía le aseguraron la creación de un sistema de vigilancia y control sobre los ciudadanos que incluyó inicialmente a grupos de choque y más adelante, grupos paraestatales. Además, los Ortega Murillo controlaban el aparato gubernamental y sus recursos, así como a los gobiernos regionales y municipales a pesar de que éstos gozan de autonomía e independencia de acuerdo con la ley. La estructura de poder del régimen se completó estableciendo una alianza con el gran capital nacional.

El carácter autoritario del régimen y la naturaleza excluyente de sus alianzas provocó un cierre de los espacios políticos para una mayoría de actores sociales, así como

una acelerada restricción de sus libertades y derechos, entre ellos: la libertad de movilización, libertad de asociación, libertad de expresión, y uno de los derechos más importantes, el ejercicio del voto en competencias electorales transparentes. Ortega también se negó a escuchar las demandas y propuestas ciudadanas, así como la promoción de espacios de diálogo y participación ciudadana. En vez de eso, cerró toda posibilidad de apertura social y política, y persistió en la lógica de las negociaciones y acuerdos excluyentes cada que vez que necesitaba legitimar sus decisiones. Por otra parte, pretendió acallar las altas expectativas de mejoría y bienestar, así como la incomodidad ciudadana por el cierre político a través de políticas clientelistas y populistas.

Con esos niveles de restricción y autoritarismo, Nicaragua entró en un ciclo de movilización social a partir del año 2013, en el que distintos movimientos sociales comenzaron a expresar con distintas acciones sociales su descontento e insatisfacción. Tal es el caso del movimiento anticanal, con los campesinos a la cabeza; los jóvenes y ancianos que se manifestaron por la entrega de jubilaciones en el caso conocido como Ocupalns; las diferentes expresiones de rechazo a la minería y otras acciones ciudadanas demandando elecciones libres y transparentes, así como la apertura de espacios políticos democráticos. Otras dos expresiones cívicas de descontento fueron la alta abstención en las votaciones del año 2016 y 2017. Frente a todas estas muestras de insatisfacción y descontento, el gobierno prestó oídos sordos y más bien intentó reprimirlas y sofocarlas como en el caso Ocupalns y las numerosas marchas del movimiento campesino.

La presión social se incrementó significativamente de manera subterránea hasta que emergió con una gran fuerza en abril de 2018. Tal como se ha mencionado antes, los catalizadores fueron las protestas por la inoperancia del gobierno frente al incendio de la reserva natural Indio Maíz y el decreto presidencial que reformaba el sistema de seguridad social. El gobierno respondió a las protestas con represión, pero en esta ocasión, en la medida que el gobierno escalaba los niveles de represión, las marchas y protestas se extendieron por el país y se volvieron multitudinarias. Los niveles de la contienda política se elevaron al punto que la situación se convirtió en una crisis, calificada por organismos internacionales, como una crisis de derechos humanos por las graves y masivas violaciones cometidas por las fuerzas policiales y los grupos paraestatales del gobierno. Pero también es, por sus orígenes y características, una profunda crisis política que demanda una solución negociada, pacífica y democrática. También es una crisis humanitaria en tanto la represión a la que ha sido sometida la sociedad nicaragüense son graves, pues alcanzan más de 350 personas fallecidas, miles de heridos, varias decenas de desaparecidos, más de 700 personas encarceladas y enjuiciadas de manera arbitraria y más de 50 mil exiliados.

Con este recuento es posible afirmar que la insurrección cívica de abril no surgió de la nada y que ya había señales claras que permitían reconocer el descontento y



Foto: Carlos Herrera

la insatisfacción social, así como la naturaleza autoritaria del gobierno; sin embargo, es cierto que nadie imaginó los niveles de represión y violencia con las que Ortega y Murillo responderían desde abril hasta la fecha. La crisis política existía desde antes, pero se ha agravado por la respuesta del gobierno y porque marca un hito en el proceso de construcción de la democracia por diversas razones: el carácter cívico de las acciones, el apoyo multitudinario y el aislamiento internacional de Ortega, entre otras.

Los actores emergentes

La insurrección cívica de Abril reveló procesos sociales y políticos en curso que no se percibían claramente con anterioridad: el entramado de tejidos sociales; la multiplicación de nuevos liderazgos, especialmente entre los jóvenes; y la vocación eminentemente cívica de la sociedad nicaragüense para promover cambios sociales. Entre todos los actores que conforman el movimiento cívico de Abril, hay que destacar por sus niveles de participación, la fortaleza de sus estructuras organizativas y sus liderazgos al movimiento campesino, el movimiento juvenil y el movimiento de mujeres. Los tres movimientos no son los únicos que participan en el movimiento cívico de Abril, pero si muestran los procesos en curso, las fortalezas y potencialidades de los actores sociales emergentes en el país.

El movimiento campesino es uno de los movimientos sociales de carácter histórico en Nicaragua. ha tenido diferentes épocas y ha cambiado en el tiempo. Después del derrocamiento de la dictadura somocista, surgieron muchas formas de organización campesina que estaban

orientadas a los aspectos económicos, sociales y políticos, pero durante el período de la revolución sandinista el movimiento sufrió un proceso de cooptación similar al de otros. Algunos estudios confirman que una buena parte de la Resistencia Nicaragüense, o contrarrevolución, durante los años 80, estaba conformada mayoritariamente por campesinos y comunidades indígenas afectadas por las equivocadas políticas de la revolución.

Diversas expresiones del movimiento campesino mantuvieron sus acciones sociales durante las siguientes décadas, la mayoría de ellas vinculadas a temas como la propiedad de las tierras, acceso a créditos, acceso al agua, protección de recursos naturales, entre otros. Sin embargo, sus acciones y potencial de movilización se encontraban dispersos. Las cosas cambiaron significativamente a partir de 2013, cuando el gobierno Ortega otorgó la concesión para la construcción de un canal interoceánico a una oscura empresa china a través de la ley 840. Casi inmediatamente, en la zona sur del país, una de las rutas probables para la construcción del canal, se comenzó a gestar de manera acelerada un movimiento campesino que rechaza la concesión canalera porque amenaza directamente sus tierras. El movimiento campesino anticanal logró emerger como un interlocutor de gran fuerza frente al gobierno, a pesar de que éste no lo ha querido reconocer y mucho menos, ha facilitado el diálogo con ellos. Por el contrario, desde el inicio el gobierno decidió reprimir las marchas y actividades organizadas por el movimiento, especialmente en la navidad del 2014 y la marcha nacional campesina organizada en octubre de 2015. A inicios de 2018, el movimiento campesino había realizado más de 90 marchas,



Foto: Carlos Herrera

contaba ya con una fuerte estructura organizativa, un amplio y reconocido liderazgo territorial, y estaba en proceso de construcción de alianzas y coordinaciones con otras expresiones del movimiento campesino en otras localidades del país, tales como los movimientos de rechazo a la minería, las organizaciones de defensa de la tierra y el acceso al agua, entre otras.

Cuando inició la insurrección cívica de Abril, los integrantes del movimiento campesino se sumaron a las acciones de movilización y protesta, participaron en numerosas marchas organizadas en todo el país, organizaron tranques (cortes de carretera) en diferentes lugares del país para defenderse de la represión policial y los grupos paraestatales, y varios de sus líderes nacionales participaron en el diálogo nacional. Su participación fue tan decidida y activa que se convirtieron en uno de los blancos principales de la represión gubernamental. Fueron atacados, varios de ellos asesinados, heridos y miles tuvieron que huir, escondiéndose en zonas montañosas o exiliándose en Costa Rica, el país vecino. Varios de sus líderes nacionales han sido apresados bajo cargos falsos, cruelmente torturados, sometidos a juicios arbitrarios y condenados injustamente. Otra parte de sus líderes son perseguidos por el gobierno y sus comunidades han sido militarizadas. Aun así, el movimiento no ha sido desarticulado, se encuentra activo dentro y fuera del país.

El movimiento juvenil también fue cooptado por el FSLN desde la década de los 80, de tal manera que casi todas las expresiones organizativas de jóvenes en el ámbito político estaban vinculadas al partido, tal es el caso de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), la Federa-

ción de Estudiantes de Secundaria (FES) y la Juventud Sandinista 19 de Julio (JS). Todas estas organizaciones a su vez cooptaron a otras formas de organización juvenil, de tal manera que el movimiento entró en una fase de adormecimiento desde entonces. Ciertos grupos de jóvenes desarrollaron formas de participación y organización que estaban vinculadas con temas de políticas públicas o causas sociales. Mientras tanto, entre la sociedad nicaragüense comenzó a extenderse fuertemente la idea de que los jóvenes eran apáticos e indiferentes, dando lugar a algunos debates sobre todo en los medios de comunicación y grupos organizados de sociedad civil.

Durante la segunda mitad de la década de 2010, comenzaron a desarrollarse diversas expresiones organizativas juveniles, bastante autónomas y críticas, que comenzaron a construir nuevas prácticas políticas entre los jóvenes. Algunas de ellas estaban enfocadas en problemas o temas de interés para los jóvenes y en apariencia, no estaban conectados con temas políticos en strictu sensu. En Abril de 2018, ese incipiente movimiento juvenil se lanzó a las calles para protestar contra la negligencia gubernamental en el incendio de la reserva biológica de Indio Maíz y las reformas al sistema de seguridad social. Desde entonces hasta la actualidad, han surgido numerosas organizaciones de jóvenes y se ha ampliado su participación en otras expresiones organizativas territoriales o sectoriales, de tal manera que el movimiento se encuentra en un franco proceso de reactivación.

El movimiento de mujeres es uno de los más fuertes y dinámicos del país. Desde 1990 ha dado muestras de una gran autonomía, capacidad de movilización e interpelación

pública al poder. Conformado por numerosas organizaciones de mujeres, algunas de ellas constituidas como ONGs y otras con estructuras diversas, el movimiento de mujeres tiene presencia en todo el territorio nacional y se ha enfocado en acciones relacionadas con: los derechos específicos de las mujeres, la demanda de democracia con equidad, y la prevención de la violencia contra las mujeres, entre otros objetivos estratégicos. El movimiento de mujeres siempre ha sido blanco de los ataques del poder y sus líderes han sido perseguidas, especialmente desde el 2007 con la llegada de Daniel Ortega a la presidencia.

Las acciones de movilización social se incrementaron significativamente durante los últimos diez años frente a las posiciones conservadoras y fundamentalistas del gobierno Ortega-Murillo que aprobó la prohibición del aborto terapéutico, promovió políticas públicas orientadas a limitar los derechos sexuales y derechos específicos de las mujeres, promovió abiertamente un enfoque que privilegia a la familia por encima de las mujeres y además, se negó sistemáticamente a emprender acciones para prevenir la violencia contra las mujeres, así como a sancionar a los agresores, tal como sucedió con el estancamiento y retroceso en la aplicación de la Ley 779. Todas las acciones emprendidas por el movimiento de mujeres, tanto jurídicas como políticas y de movilización social, fueron abiertamente bloqueadas y reprimidas por el gobierno, tal como sucedió en diversas ocasiones con las marchas conmemorativas de fechas importantes para el movimiento como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, o el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.

Varios grupos y lideresas del movimiento de mujeres se involucraron de lleno en la insurrección cívica de Abril desde que inició, y en la medida que se amplió y extendió a todo el país, todos los tejidos territoriales del movimiento de mujeres se involucraron en las acciones cívicas. Las jóvenes feministas han jugado uno de los papeles críticos de liderazgo dentro del movimiento cívico de Abril no solamente por su activa participación en las diferentes acciones, sino porque también han posicionado fuertemente los planteamientos feministas en su interior y como parte de una nueva propuesta de cultura política para el país.

El movimiento cívico de Abril es un movimiento ciudadano amplio, integrado por estos tres movimientos específicos y por numerosos grupos y organizaciones dentro y fuera del país, que se encuentran activos. Como ya se ha mencionado y se puede observar en las acciones realizadas desde Abril, la columna vertebral de su estrategia es la acción cívica, y la violenta represión del gobierno no ha podido quebrar la firmeza de tal decisión. Una gran parte de ellos son actores emergentes, pero otro grupo importante son actores y organizaciones que ya existían desde antes y han dinamizado sus acciones a partir de Abril. Ambos forman parte de un valioso capital social y político, y sus acciones muestran que el proceso de cambios en curso no es superficial. La firmeza de mantener las acciones cívicas como estrategia fundamental muestra que están cambiando la cultura y las prácticas políticas. Un buen augurio para la nueva época democrática que se abrirá pronto en Nicaragua.

El inevitable cambio

Más allá de las “coyunturas” y el contexto específico de la crisis que se hizo evidente en Abril del 2018, el régimen Ortega representa una época agotada y decadente, una época autoritaria que se aferra y pretende permanecer frente a la profundidad del cambio que se está operando en la sociedad nicaragüense. Es la encarnación de los actores y prácticas políticas tradicionales que necesitan renovarse y dar espacio a actores emergentes y nuevas formas de comprender y hacer política.

En su intento por permanecer, los Ortega-Murillo, como encarnación de orden decadente, han decidido emplear los niveles más altos de violencia y represión. Pero su derrota es estratégica porque ya rompieron todas las alianzas importantes que lo sostenían, tal es el caso del gran capital y la jerarquía católica, además, no cuenta con fuerzas sociales que lo respalden. Sus puntos de apoyo están limitados a las fuerzas policiales, los grupos paramilitares, funcionarios estatales fanatizados y la complaciente “neutralidad” del ejército. El respaldo social que tienen es prácticamente nulo, tanto así que ya ni siquiera convocan a sus seguidores a movilizaciones o marchas de apoyo y los empleados públicos se resisten a asistir a las rotondas o redondeles aun a pesar de las amenazas. Por otra parte, no cuenta con respaldo de la comunidad internacional y los pocos apoyos que exhibe provienen de países con dudosa o ninguna credibilidad democrática.

Uno de los factores de presión más fuertes son las sanciones impuestas recientemente por Estados Unidos, pues colocan a los Ortega-Murillo en una posición sumamente precaria. Además, distintos análisis económicos han advertido sobre los efectos económicos de la crisis política y la urgencia de una solución negociada y pacífica. De acuerdo con esos análisis, los efectos económicos de la crisis iniciaron desde el 2018 pero se harán sentir con mayor fuerza en el 2019, afectando no solamente a la población en general, sino también al mismo régimen que ha adoptado medidas recaudatorias y de castigo a distintos sectores económicos.

Cercado tanto por los factores políticos como económicos, y por los acelerados cambios que se han presentado en el entorno hemisférico, particularmente en América Latina, Ortega sabe que el cambio es inevitable y aunque se resista fuertemente, también sabe que es indispensable abrir una nueva transición. Su decisión de aferrarse duramente al poder es inútil, solamente elevará los costos del cambio y harán más dura la negociación, pero no lo detendrán. Los poderes fácticos de siempre, aquellos que buscan constantemente como sacar provecho de las crisis, deben comprender que esta vez las cosas son distintas en Nicaragua, que hay una firme voluntad de la sociedad nicaragüense para enrumbar al país por una ruta democrática. Ese es un hecho que tiene como evidencia la firme resistencia del movimiento social y la estrategia de acción cívica. No ha sido fácil y el trecho por andar tampoco lo será, pero no hay dudas sobre el punto de llegada. Esa es una certeza colectiva.